

Proceso de paz y sus implicaciones para las víctimas en el exterior

Boletín # 2- 7 de Noviembre de 2014

Camila Espitia
Analista CODHES

Buscando recursos para el posconflicto

La implementación de los acuerdos de la Habana será un gran reto para el país en la medida en que se pretenden realizar transformaciones importantes y de largo aliento. En ese sentido, para la realización efectiva de lo pactado es imprescindible un respaldo económico y político no solo del Estado Colombiano, sino también de la comunidad internacional.

En términos políticos es necesario que la comunidad internacional reflexione frente a las implicaciones del conflicto armado colombiano fuera del territorio nacional y por supuesto, de las ventajas de una Colombia en paz para el orden internacional. Adicionalmente, la construcción de la paz implica altos costos económicos que se podrían solventar parcialmente con el apoyo internacional en el pos acuerdo. Según cálculos de la Comisión de Paz del Senado colombiano, se necesitan al menos 90 billones de pesos (unos 45.000 millones de dólares, 35.000 millones de euros) para ayudar a financiar las inversiones que se requieren para implementar los acuerdos de paz. (Espectador, Belgica felicita a Santos , 2014)

Por lo anterior, el presidente Santos ha llevado a cabo una serie de visitas a distintos países en busca de un respaldo político y económico para el proceso de paz. En el transcurso de la semana, el Consejo Europeo, así como varios países a nombre propio, anunciaron el apoyo al proceso de paz y a las víctimas del conflicto armado. Con relación a la Unión Europea, se prevé la posibilidad de crear un fondo fiduciario con los aportes de los Estados y de las entidades privadas que deseen contribuir al apoyo financiero del proceso.

Ahora bien, la búsqueda de un apoyo internacional al proceso de paz no debe ignorar la continuidad del conflicto armado en Colombia, en el que persisten ataques sistemáticos de diversos actores armados ilegales, tal y como sucedió en el transcurso de esta semana en los departamentos de Nariño y Putumayo, particularmente.

Así las cosas, el afán por un respaldo político y económico de la comunidad internacional no

puede permitir que se ignoren las graves violaciones de los derechos humanos, ni que se descuiden los mecanismos de seguridad y protección para la población civil.

Víctimas en La Habana

La cuarta delegación de las víctimas que viajó a la Habana durante la semana, presentó una serie de demandas con enfoque diferencial, en donde se exigía de manera especial la protección de los derechos de las niñas y niños, comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes y LGTBI.

Es para destacar, que dentro de las solicitudes de la cuarta delegación se manifestó directamente a la mesa de negociación que “El Estado colombiano y los grupos armados tienen una deuda con las personas migradas y exiliadas”, por lo que demandaron un protocolo para la reparación y el retorno digno y con garantías.

En cuanto a las peticiones de la delegación, resulta desalentador que una de estas consistiera en solicitar garantías de seguridad para su retorno. Ello obedece a varias amenazas que han recibido algunas de las víctimas que han visitado la Habana en ocasiones anteriores.

En relación con la oposición que existe frente al proceso de paz, es importante señalar que varias de las organizaciones de víctimas de las FARC insisten en tener un mayor peso dentro de las negociaciones. Por esta razón, posiblemente se creará una nueva asociación que agrupe a las organizaciones bajo el nombre de Federación Nacional de Víctimas. (*Espectador, Víctimas de Farc crean organización para tener más peso en el proceso de paz, 2014*)

Procuraduría propone Pacto para la paz

Una de las iniciativas que podrían contribuir al proceso de paz, es la propuesta de crear un “Pacto para la Paz”, que consistiría en un trabajo de seguimiento, vigilancia y debate de los acuerdos que se firmen entre el gobierno y las FARC. En el Pacto para la paz participarían diferentes sectores sociales y políticos del país, a través de un diálogo que permitiría diferentes posturas políticas.

El Pacto para la paz, cuyo promotor principal es el Procurador general de la nación, supone un espacio de “amplia deliberación” sobre los acuerdos parciales que se firmen en La Habana, con el fin de promover el conocimiento de los mismos y generar discusiones. En este espacio se pretende profundizar en temas que aún no se han trabajado lo suficiente y que son muy

importantes para el proceso, por ejemplo: el mecanismo más adecuado para la refrendación de los acuerdos, el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de derechos de las víctimas, la duración de las penas privativas de la libertad, los límites de la participación en política a los guerrilleros que han cometido graves violaciones a los derechos humanos o que estén condenados por el narcotráfico, etc. (*Tiempo*, 2014)

Dentro de los altos costos que traería el pos acuerdo para el país, se ha estudiado que en estos momentos la rama judicial tiene un déficit presupuestal que le dificultaría tener una estructura física y tecnológica necesaria para realizar las labores dirigidas a los procesos de futuros desmovilizados de la guerrilla.

En relación con el tema de la justicia, el presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, ha asegurado que se requiere un aparato judicial que evalúe todos los procesos que lleguen, de cara a la implementación de una justicia transicional que cumpla con los requisitos de verdad, reparación y no repetición. En el marco de la justicia transicional, se prevé establecer diferentes tipos de penas, así como penas alternativas, para los guerrilleros que se desmovilicen. Las penas alternativas no significan la ausencia de sanción y podrían ser penas reparadoras como una posibilidad de sanción alternativa a la cárcel. (*Espectador*, 'El país no está preparado para afrontar el postconflicto': Judicatura, 2014)

Finalmente, es oportuno reflexionar frente al aumento de las condiciones de inseguridad que viven algunos departamentos fronterizos como Nariño, Putumayo y Chocó. Los ataques con explosivos, el control de territorial y los asesinatos selectivos se han intensificado los últimos meses, situación que resulta preocupante para la región fronteriza, especialmente en relación con las migraciones forzadas.